

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Francisco Cañedo, contra el veredicto del jurado de imprenta reunido en Culiacan el 3 de Mayo último, para designar la pena en que había incurrido como culpable de haber publicado un aviso injurioso á D. Juan N. de la Vega.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Agosto 21 de 1873.—En el juicio de amparo promovido por el C. Francisco Cañedo contra el veredicto del jurado de sentencia que lo condenó á seis meses de prision, se falla de conformidad con el dictamen del asesor que es como sigue:

Visto este juicio de amparo que promueve D. Francisco Cañedo contra el veredicto que el jurado de sentencia reunido en Culiacan, pronunció el 3 de Mayo último condenándolo á seis meses de prision, y alegando aquel que tal condena se le impuso en su ausencia, sin permitirle el derecho de recusacion que le otorga el artículo 26 de la ley de 4 de Febrero de 1868, que es la que reglamenta el uso de la libertad de imprenta; y por último, sin permitirle defensa alguna, por cuyas privaciones considera violada en su persona la garantía que le concede la fraccion 5ª artículo 20 de la Constitucion general; y que como ni considera á dicho jurado instalado con arreglo á la ley, no lo estima tampoco como autoridad competente para decretar su prision, por cuya causa teme tambien que se quebrante en su persona la garantía que le dispensa la primera parte del artículo 16 del mismo Código. Visto así mismo el pedido del quejoso sobre suspension del acto que reclama; la providencia que sobre este recayó, y el aviso que se dió de haber quedado suspenso, aquel: visto igualmente el expediente formado y que en testimonio obra de fojas 15 á la 24, á consecuencia del denuncia que hizo el C.

Juan N. de la Vega, del aviso impreso que mandó fijar el mismo Sr. Cañedo, acusando tal documento de contrario á la vida privada, y en cuyo testimonio se ven los acuerdos del Ayuntamiento de Culiacan para formar los jurados de calificacion y de sentencia, los procedimientos de citas, las tramitaciones del juicio de imprenta y el veredicto que ha motivado esto. Visto por último las pruebas presentadas por el quejoso; el pedimento del C. Promotor fiscal; la citacion para sentencia y el nombramiento de asesor, hecho en el que suscribe, con todo lo demás que ver convino. Y considerando: 1º: Que el ocurso presentado por el Sr. Cañedo promoviendo el juicio de amparo que solicita, está fundado en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y presentado con sugesion á lo que determina el 4º de la misma ley. 2º: Que por los acuerdos del Ayuntamiento de Culiacan habidos en los dias 8 y 13 de Noviembre de 1872 y en 2 y 3 de Mayo del presente año, se ve el modo con que fueron instalados dichos jurados, y consta el tiempo que trascurrió de la instalacion del primero al segundo, con cuya demora se quebrantó el artículo 25 de la citada ley de imprenta. 3º: Que en el acuerdo del 2 de Mayo ya citado, se observó claramente, que aunque el Lic. D. Damian S. Ballesteros se presentó con la oportunidad debida como apoderado del Sr. Cañedo á presenciar el sorteo de los CC. que debian formar el jurado de sentencia, no se le admitió á tal acto por haber sido desechada su representacion, y se procedió á el sin citacion del acusado, con cuyo procedimiento, despues que se le privó de aquel derecho, la ley de imprenta nó fué exactamente aplicada al hecho, y por lo mismo en él hay una verdadera violacion de la garantía que le otorga en la segunda parte del artículo 14 el Código fundamental. 4º: Que en virtud de haber deshechado indebidamente el Ayuntamiento la representacion de Ballesteros por Cañedo, quien lo facultó para que presenciara

el sorteo del jurado de sentencia ó hiciera uso de los derechos que la repetida ley de imprenta permite á todo responsable de cualquier impreso, de hecho quedó privado aquel de un recurso que le da la ley, y quedó tambien sin el de ser oído en el juicio de conciliacion, ni defendido ante el jurado, á la vez que no se le hizo nueva citacion por autoridad alguna, y con la que sin duda no se habria violado la garantía que le otorga el artículo 20 del repetido Código; mas como por la falta de citacion á Cañedo quedó sin defensa alguna en el juicio de imprenta, á la vez que no volvió á ser citado, despues que no se admitió á su representante, y por cuya falta no concurrió al jurado persona alguna que lo defendiera, y ni siquiera se le avisó que no fué admitido Ballesteros por su apoderado, como debió haberlo hecho aquel juez, como única autoridad competente para citar al quejoso á fin de que concurriera por sí ó por apoderado, á usar del derecho de recusacion y á defenderse en el juicio de imprenta, es evidente que se violó dicha garantía. 5º y último: Que estando como estan bien determinadas las violaciones de garantías de que se queja Cañedo, así como bien probados los hechos en que apoya su recurso, no hay razon para negársele el amparo que solicita.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, fallo con las siguientes proposiciones: Primera: La Justicia Nacional ampara y protege al C. Francisco Cañedo, contra el veredicto que el jurado de sentencia pronunció en la ciudad de Culiacan el 3 de Mayo último, condenándolo á seis meses de prision. Segundo: Comuníquese la parte resolutive de esta sentencia al C. Prefecto del Distrito de Culiacan para su conocimiento; y sacándose dos copias de ella, una para el Semanario Judicial de la Federacion, y otra para publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Remítanse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia, para su revision.

Así yó el primer suplente del juzgado de Distrito del Estado, en ejercicio, lo proveí y firmé por ante mi el secretario. Doy fé.
—*Maximino Barragan.*—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Agosto 27 de 1873.
—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el veredicto del jurado de imprenta reunido en Culiacan el 3 de Mayo último, para designar la pena en que habia incurrido como culpable de haber publicado un aviso injurioso á D. Juan N. de la Vega, por cuyo veredicto fué condenado á seis meses de prision sin su audiencia, sin haber podido usar del derecho de recusacion que concede la ley sobre libertad de la prensa, á causa de no haberse admitido la personalidad del Lic. Damian Ballesteros, á quien habia conferido poder para representarlo en el juicio, y sin que por eso las actuaciones de este se entendieran directamente con el quejoso; cuyos procedimientos violan en su concepto las garantías que consignan en los artículos 16 y 20 fraccion 5ª de la Constitucion federal. Y considerando: Que efectivamente, según aparece de las constancias del juicio de imprenta que obran en estos autos, la personalidad del Lic. Damian Ballesteros como apoderado del C. Francisco Cañedo, fué deshechada por el Ayuntamiento de Culiacan sin hacerse la notificacion correspondiente al reo, por sí ó por medio de persona de su confianza, con poder bastante para hacer valer sus derechos; lo que dió por resultado que quedara sin defensa el quejoso, y sin poder usar de los recursos legales á que hubiera lugar, con violacion del artículo 20 fraccion 5ª de la Constitucion federal; y teniendo presente el artículo

101 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez primer suplente de Distrito de Sinaloa en 21 de Agosto del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Francisco Cañedo, contra el veredicto que el jurado de sentencia pronunció en la ciudad de Culiacan el 3 de Mayo último, condenándolo á seis meses de prision.—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Febrero de 1874.
—*Emilio Ordaz*, oficial mayor.

COMPETENCIA.

Iniciada por el Juzgado 3º de lo criminal de México, al C. Prefecto político de Guadalupe Hidalgo, para conocer de la causa que se ha instruido contra Dionisio Chavez, acusado del delito de robo con asalto y en despoblado.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que el Juzgado 3º de lo criminal de esta Capital, ha iniciado competencia al C. Prefecto político de Guadalupe Hidalgo, para conocer de la causa que

se ha instruido contra Dionisio Chavez, acusado del delito de robo con asalto y en despoblado, cuya causa ha seguido dicha Perfectura en virtud de la jurisdiccion que para ello le dá la ley de 3 de Mayo próximo pasado.

La primera cuestion que desde luego surge, es la de si esa Suprema Corte tiene ó nó facultad para dirimir el conflicto jurisdiccional que se ha iniciado entre las expresadas autoridades.

En efecto, la Suprema Corte, en materias de competencia de jurisdiccion, deriva la suya del artículo 99 de la Constitucion general de la República, y despues de la fraccion 3ª artículo 13 capítulo 2º de su reglamento particular.

Pues bien, el primero de los artículos citados dice: "Coresponde á la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la Federacion, entre estos y los de los Estados, ó entre los de un Estado y los de otro." Segun este texto que así limita y circunscribe las atribuciones de la Corte en un punto tan delicado como es el de fijar la jurisdiccion de un tribunal, para conocer tal vez y como sucede en el presente de un negocio tan grave como es la vida de un hombre, el cual cuenta en su abono las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 del Código fundamental, ¿en que miembro de la division ó clasificacion que marca el artículo 99 transcrito, puede considerarse comprendida la Gofatura política de Guadalupe, para así concluir que esa 1ª Sala conforme al artículo citado de su reglamento, pueda fallar y decidir cual sea la autoridad competente para juzgar á Dionisio Chavez? La clasificacion del artículo constitucional comprende tres casos: 1º competencia entre tribunales de la federacion; 2º competencias entre estos y los de los Estados; 3º competencias entre los tribunales de los mismos. Simplificando aun mas, la Constitucion prevee las competencias entre tribunales federales y tribunales de los Estados.